

Siendo las 12:00 doce horas con cero minutos del día 10 diez de diciembre de 2015 dos mil quince, en la sala de juntas de la Dirección General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que se encuentra en las instalaciones ubicadas en la calle Batalla de Zacatecas número 2395, en el Fraccionamiento Revolución, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; se constituyen los integrantes del Comité de Clasificación de Información Pública del sujeto obligado Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el **Mtro. Luis Octavio Coter Bernal**, Director General y Presidente de este Comité de Clasificación; la **Mtra. Alicia Ortega Solís**, Titular de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado y Secretario de este Comité, así como el **Lic. Oscar Daniel Ornelas Anguiano**, Coordinador jurídico y Encargado del despacho y resolución de los asuntos de la Contraloría de este Organismo; siendo así, se somete a los presentes el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.- Lista de asistencia;
- II.- Declaratoria de quórum;
- III.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día;
- IV.- Análisis y en su caso aprobación de la clasificación de la información consistente en los dictámenes e informes periciales emitidos por este Instituto, incluidas las necropsias, al igual que toda la documentación que haya sido utilizada y/o necesaria para su elaboración, así como toda aquella información y documentación que guarde relación con esos asuntos, para ser parte de los registros que integran la carpeta de investigación, prevista por el segundo párrafo del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor.

DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA

I. LISTA DE ASISTENCIA;

Ha sido cubierto el punto I del orden del día, al encontrarse presentes en este acto los integrantes del Comité de Clasificación, con lo que se acredita que se cuenta con el quórum requerido y en consecuencia las decisiones que se tomen en la presente sesión serán completamente validas; por lo que se procede a desahogar el siguiente punto.

II. DECLARACIÓN DEL QUORUM;

Quedo solventado en el punto anterior, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

III. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA;

Se cuestiona a los asistentes si es de aprobarse el orden del día propuesto, a lo cual se accede de forma unánime, con lo que se da por desahogado dicho punto.

IV. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSISTENTE EN LOS DICTÁMENES E INFORMES PERICIALES EMITIDOS POR ESTE INSTITUTO, INCLUIDAS LAS NECROPSIAS, AL IGUAL QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE HAYA SIDO UTILIZADA Y/O NECESARIA PARA SU ELABORACIÓN, ASÍ COMO TODA AQUELLA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE GUARDE RELACIÓN CON ESOS ASUNTOS, PARA SER PARTE DE LOS REGISTROS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, PREVISTA POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR.

La Secretario expone que en la Séptima Sesión del Comité de Clasificación del año 2013, celebrada con fecha 17 de septiembre de 2013, mediante acuerdo ACU/IJCF/CCIP/07/2013, se clasificó como **INFORMACIÓN RESERVADA**, los dictámenes emitidos por este Instituto, incluidas las necropsias, al igual que toda la documentación que haya sido utilizada y/o necesaria para su elaboración, así como toda aquella información y documentación que guarde relación con esos asuntos, pero para formar parte de las averiguaciones previas, aún y cuando éstas terminen con la determinación de ejercicio o no de la acción penal, cuando éstas se hayan ejercido y formen parte de los juicios penales respectivos; o cuando se hayan archivado de manera provisional, en espera de allegarse datos para proseguir las averiguaciones, de conformidad a lo previsto por el artículo 100 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

No obstante lo anterior, tomando en consideración que el nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio, ya se encuentra implementado en algunos distritos judiciales del Estado de Jalisco, como Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, entre otros, como resultado del decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 18 de junio de 2008, la cual derivó en la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que entrara en vigor el 16 de marzo de 2015, que regula las reglas de dicho sistema y por ende, ya se encuentra vigente en algunos distritos judiciales de nuestra entidad, y que el día 15 de mayo del año 2016, ya deberá estar aplicado en todos los distritos judiciales del Estado de Jalisco, según Decreto 25417/LX/15, emitido por el C. Gobernador del Estado de Jalisco y publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco con fecha 22 de agosto de 2015; ley adjetiva que prevé en el segundo párrafo de su artículo 337, a los registros de investigación, entendidos éstos como todos los documentos que integran la carpeta de investigación, así como fotografías, videos con o sin audio, grabaciones de voz, informes periciales y pruebas periciales que obren en cualquier tipo de soporte o archivo electrónico; anteriormente integradas dichas documentales a las averiguaciones previas, contempladas en el Código de Procedimientos Penales del Estado; es por lo que este Comité estima necesario fundar y motivar, en base a dicho ordenamiento, con las atribuciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios le confiere, en su artículo 30, punto 1, fracción III, proponer la clasificación de la información consistente en los dictámenes e informes periciales



emitidos por este Instituto, incluidas las necropsias, al igual que toda la documentación que haya sido utilizada y/o necesaria para su elaboración, así como toda aquella información y documentación que guarde relación con esos asuntos, pero **para ser parte de los registros que integran la carpeta de investigación, prevista por el segundo párrafo del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor.**

En ese tenor, en primer término es de señalarse que este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, como instancia de seguridad pública, tiene por objeto auxiliar a las autoridades en la procuración e impartición de justicia, mediante el establecimiento y operación de un Sistema de Ciencias Forenses, que establece los requisitos para la elaboración de dictámenes o informes periciales especializados, conforme a los avances de la ciencia y la técnica de manera imparcial y con autonomía, tal como lo prevé el artículo 4° de su Ley Orgánica y dentro de sus atribuciones principales está la de elaborar y proponer al Ministerio Público o la policía con conocimiento de éste, así como a las autoridades encargadas de impartir justicia, los dictámenes e informes periciales que a su juicio sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos jurídicamente controvertidos, acorde al numeral IV del numeral 5 de la misma Ley Orgánica.

Por su parte, el artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que durante la investigación, el Ministerio Público o la Policía con conocimiento de éste, podrá disponer la práctica de los **peritajes** que sean necesarios para la investigación del hecho. El dictamen escrito no exime al perito del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio.

Ahora bien, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su artículo 17, punto 1, fracción I, inciso f) y fracción II establece como información reservada, entre otra, la siguiente:

“...1. Es información reservada:

I. Aquella información pública, cuya difusión:

a) ...

...

f) *Cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de impartición de la justicia; o*

g) ...

II. Las averiguaciones previas;

III. ...

IV. ...

...”

...

Asimismo, cabe recordar lo que establece el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece el supuesto de reserva de los actos de investigación, aplicable al caso que nos ocupa, y que a la letra dice:

“Artículo 218. Reserva de los actos de investigación



*En la investigación inicial, los registros de ésta, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, **son estrictamente reservados**. El imputado y su Defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, o sea citado para comparecer como imputado, y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para no afectar el derecho de defensa del imputado.*

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.”

De igual forma, resultan aplicables los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en vigor, publicados en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el 10 de junio de 2014, mismos que establecen en su Capítulo III, “De la Información Reservada”, textualmente en su parte conducente lo que sigue:

“TRIGÉSIMO SEXTO.- La información se clasificará como **reservada** en los términos de la **fracción I, inciso f), del artículo 17 de la Ley**, siempre que la difusión de la información cause perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de impartición de justicia y ponga en peligro el orden y la paz pública.

Se pone en peligro la paz y el orden público cuando la difusión de la información pueda:

- a)...
- b) Dañar o dificultar las estrategias para combatir las acciones delictivas;
- c) Entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
- d)...
- e) ...;
- f)...
- ...”

“TRIGÉSIMO OCTAVO.- La información se clasificará como **reservada** en los términos de la **fracción II del artículo 17 de la Ley**, cuando la averiguación previa, que de conformidad al artículo 8 fracción I del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de



Jalisco, abarque las actuaciones practicadas por el Ministerio Público o sus auxiliares, y con motivo de la comisión de un delito, y aun y cuando termina con la determinación de ejercicio o no de la acción penal, conservará la reserva:

- 1. Cuando se haya ejercido la acción penal, y la misma forme parte del juicio penal respectivo; y*
- 2. Cuando se haya archivado de manera provisional, en espera de allegarse datos para proseguir la averiguación, de conformidad a lo previsto por el artículo 100 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Jalisco."*

Cabe señalar, que en el artículo 17 punto 1, fracción II de la Ley de la materia y en el Lineamiento Trigésimo Octavo antes transcrito, se hace alusión a que la averiguación previa, abarca las actuaciones practicadas por los auxiliares del Ministerio Público, siendo éstas las llevadas a cabo por los peritos de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, conforme a las atribuciones que este Instituto tiene como auxiliar de dicha autoridad; por lo que con motivo de la aplicación en algunos distritos judiciales del Estado de Jalisco, del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, como ya se expuso, se debe entender que los registros que conforman la carpeta de investigación que prevé el segundo párrafo del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es equiparable y/o hace las veces de la averiguación previa, prevista en el Título Segundo de la Ley Adjetiva en materia penal en el Estado de Jalisco aún vigente, para el anterior sistema inquisitorio mixto.

Es así que, tomando en consideración lo establecido en el lineamiento Trigésimo Octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública que deberán observar los sujetos obligados antes transcrito, los registros que integran la carpeta de investigación, prevista en el segundo párrafo del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos penales, abarca las actuaciones practicadas por los auxiliares del Ministerio Público, como lo son los dictámenes e informes periciales, incluidas las necropsias, elaborados por personal adscrito a este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien tiene el carácter de instancia de seguridad pública y cuyo objeto es auxiliar a las autoridades en la procuración e impartición de justicia, mediante la elaboración de los mismos, de manera imparcial y con autonomía de las autoridades a las que auxilian, acorde a lo estipulado por el numeral 4 de la Ley Orgánica de este Instituto, antes mencionado.

Luego entonces, **los dictámenes e informes periciales** que emite este Organismo, **incluidas las necropsias**, al ser elementos que forman parte de los registros que integran la carpeta de investigación, **también deberán ser considerados como información reservada**, como lo establece el numeral 17, punto 1, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; **al igual que toda la documentación que haya sido utilizada y/o necesaria para su elaboración, para ser parte de dichas investigaciones, así como toda aquella información y documentación que guarde relación con esos asuntos.**



En ese sentido, los dictámenes e informes periciales, incluidas las necropsias, entendidos éstos como actuaciones practicadas por personal de este Instituto, como instancia de seguridad pública, en auxilio al Ministerio Público, forman parte de la actividad del Estado inherente a la procuración e impartición de justicia; sin embargo, dichas actuaciones sólo se limitan a realizar el trabajo científico y pericial para entregarlo a la autoridad competente a la que auxilia, cuando se requieran de conocimientos especiales para el examen de personas, hechos u objetos, con el fin de que le sirva de ilustración y resuelva el caso concreto; lo cual encuentra su fundamento en el artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que durante la investigación, el Ministerio Público o la Policía con conocimiento de éste, podrá disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho; debiéndose advertir que la autoridad solicitante, goza en todo momento del más amplio criterio para valorar en conjunto con otras actuaciones que practique, los dictámenes periciales emitidos por esta Institución. No obstante, desconoce y no es de su competencia saber el estatus jurídico en el que se encuentran los registros que integran la carpeta de investigación y/o procesos, previstos por la Ley Adjetiva Penal de índole nacional, para procurar y administrar justicia, de los que forman parte integrante dichos dictámenes e informes periciales.

Es por ello que **los dictámenes e informes periciales emitidos por este Instituto, incluidas las necropsias, para ser parte de los registros que integran la carpeta de investigación**, prevista por el artículo 337 segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que abarca las actuaciones practicadas por los auxiliares del Ministerio Público, **al igual que toda la documentación que haya sido utilizada y/o necesaria para su elaboración, para ser parte de dicha carpeta de investigación, así como toda aquella información y documentación que guarde relación con esos asuntos, deberán clasificarse como información reservada, aún y cuando se configuren cualquiera de los supuestos establecidos en los artículos 253, 254 y 255 del ordenamiento legal antes enunciado, o cuando se haya ejercido la acción penal**, tal como lo establece el lineamiento Trigésimo Octavo de los Generales en Materia de Clasificación de Información Pública que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de la materia, aplicado al caso concreto por analogía de razón, ya que se insiste, este Instituto carece de la facultad para conocer de los estatus jurídicos en los que se encuentran las carpetas de investigación, en las que se solicite el actuar de los peritos adscritos a este sujeto obligado.

Por otra parte, el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, establece que para negar el acceso o entrega de información reservada, los sujetos obligados deben justificar que se cumple con lo que a continuación se transcribe:

- I. Que la información solicitada se encuentre prevista en alguna de las hipótesis de reserva que establece la ley;*
- II. Que la revelación de dicha información atente efectivamente el interés público protegido por la ley, y*

III. Que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

PRUEBA DE DAÑO

Acorde al numeral 18, fracción I de la Ley de la materia, este sujeto obligado deberá comprobar primeramente que la información propuesta a clasificar, **se encuentre prevista en alguna de las hipótesis que establece la Ley como reservada**, lo cual sucede en la especie como ya se expuso; pues en primer término, los **dictámenes e informes periciales, incluidas las necropsias, al igual que toda la documentación que haya sido utilizada y/o necesaria para su elaboración, así como toda aquella información y documentación que guarde relación con esos asuntos, forman parte de los registros que integran la carpeta de investigación**, prevista en el segundo párrafo del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, y es equiparable y/o hace las veces de la averiguación previa, prevista en el Título Segundo de la Ley Adjetiva en materia penal en el Estado de Jalisco aún vigente; siendo dichas carpetas, actuaciones practicadas por personal de este Instituto, como auxiliar del Ministerio Público, conforme a sus atribuciones; de tal suerte que las carpetas de investigación, se consideran reservadas, conforme al numeral 17, punto 1, fracción II de la Ley de la materia, aplicada por analogía de razón.

Por su parte, la fracción II del artículo señalado en el párrafo anterior, prevé que se deberá justificar que la revelación de la información atente efectivamente el interés público protegido por la ley, lo que también ocurre en el caso de que se trata; toda vez que el darse a conocer el contenido de los dictámenes e informes periciales emitidos por este Instituto, incluidas las necropsias, al igual que toda la documentación que haya sido utilizada y/o necesaria para su elaboración, así como toda aquella información y documentación que guarde relación con esos asuntos, para ser parte de los registros que integran la carpeta de investigación, **sí atenta contra el interés público protegido por la Ley**, porque podría causar un grave perjuicio a las actividades de persecución de los delitos y de impartición de justicia; ya que se estaría revelando información que le corresponde emitir solo a este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, conforme a las atribuciones que le otorga la Ley, en auxilio de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, y no es atribución de este Instituto, informar o dar a conocer elementos que servirán de prueba para resolver un caso concreto, por lo que resultaría en un grave perjuicio, que este sujeto obligado distrajera información para entregarla a terceros, entendiendo por tales, a todos aquéllos que no son la autoridad que ha solicitado la intervención del Instituto, en los procedimientos que nuestra Constitución Política ha establecido para procurar y administrar justicia.

En consecuencia, de relevarse la información que ahora se clasifica, redundaría en un perjuicio al interés público, toda vez que se podrían entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional, al obstaculizarse las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de delitos, pudiendo terceras personas involucradas con algún detenido, o incluso ajenos a dicha carpeta de investigación, tomar medidas de protección, que afecten la seguridad del Estado y la procuración e impartición de justicia por parte de



las autoridades competentes para ello, teniendo en este caso, un daño mayúsculo para la sociedad, que es quien se beneficia o se ve afectada por una correcta o incorrecta resolución de los asuntos respectivos, al dificultarse las estrategias para combatir las acciones delictivas, en perjuicio del interés público y del bien común.

Finalmente, la fracción III del artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que se deberá justificar que **el daño o el riesgo de perjuicio que produciría con la revelación de la información supera el interés público general de conocer la información de referencia**; toda vez que no se acredita un interés generalizado en ello, sino solo del solicitante, ya que su difusión, **sí causaría un perjuicio grave a las actividades de persecución de los delitos y de impartición de justicia**, ya que podrían entorpecerse el curso de los registros que integran la carpeta de investigación y/o procesos, al coartarse el sigilo que conlleva este tipo de procedimientos y en todo caso, la autonomía con la cual la autoridad debe resolver en tal o cual sentido, y con tal o cual elemento probatorio, con lo que se podría intervenir de manera negativa en la toma de decisiones y contra la correcta resolución de los asuntos, generando un daño indeterminable, tanto para las partes involucradas, como para el Estado en sí, en su interés de protección de la armonía de la sociedad, lograda con la correcta procuración e impartición de justicia.

Con lo antes expuesto, se da cumplimiento con lo establecido en el numeral 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, anteriormente citado.

En adición a los sustentos ya planteados, también resultan aplicables los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que establecen en el Capítulo II, Sección I de la Información Reservada, lo siguiente:

***"NOVENO:** Para dictaminar si la información tiene el carácter de reservada los sujetos obligados a través de su comité de Clasificación, deberán determinar que la misma se encuentra dentro de los supuestos que prevé el artículo 17 de la Ley, además de precisar que la publicidad de la misma causaría un daño presente, probable y específico.*

***DÉCIMO:** La información reservada únicamente deberá ser manejada por el personal directamente involucrado en las labores propias de la generación y manejo de la información.*

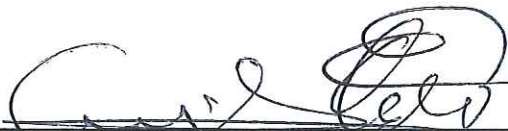
***DÉCIMO PRIMERO:** La información que tenga el carácter de reservada deberá ser resguardada en un lugar seguro, de manera que no se conserve en archivos de fácil acceso al público."*

Así las cosas, los integrantes del Comité de Clasificación acuerdan lo siguiente:

ACU/IJCF/CCIP/06/2015

*Se clasifica como **INFORMACIÓN RESERVADA**, los dictámenes e informes periciales emitidos por este Instituto, incluidas las necropsias, al igual que toda la documentación que haya sido utilizada y/o necesaria para su elaboración, así como toda aquella información y documentación que guarde relación con esos asuntos, para ser parte de los registros que integran la carpeta de investigación, prevista por el segundo párrafo del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, aún y cuando se configuren cualquiera de los supuestos establecidos en los artículos 253, 254 y 255 del ordenamiento legal antes enunciado, o cuando se haya ejercido la acción penal, quedando en ese carácter por un plazo de 6 seis años, contados a partir del día 10 diez de diciembre del año 2015 dos mil quince.”.*

En razón de haber sido desahogado el orden del día en todos sus puntos, se declara clausurada la presente sesión, siendo las 13:20 trece horas con veinte minutos del día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo.-----



Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal,
Director General y Presidente de este Comité de Clasificación



Mtra. Alicia Ortega Solís
Titular de la Unidad de Transparencia del
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
y Secretario del Comité.



Lic. Oscar Daniel Ornelas Anguiano,
Coordinador jurídico y Encargado del
despacho y resolución de los asuntos de
la Contraloría de este Organismo

AOS.